RESOLUCIÓN DEFENSORIAL N° 001-DPE-CGDZ4-2017-RP
INVESTIGACIÓN DEFENSORIAL N° 4681-DPE-CGDZ4-2017
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR
COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4.- Oficina Portoviejo

Portoviejo, Enero 02 de 2018, a las 10h00.

I. ANTECEDENTES Y HECHOS.-

1. Llegó a nuestro conocimiento que en las diferentes notarías públicas de la provincia de Manabí para el cobro de la tasa y/o tarifa notarial a las personas con discapacidad se estaba aplicando el Art. 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, a pesar que el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que tales personas están exentas de dicho pago. Hecho que previo a dar inicio al presente trámite defensorial, fue puesto en conocimiento del Director Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí, mediante oficio N° DPE-CGDZ4-2017-0527-O, a fin que se tomen lo correctivos del caso.

2. De igual manera llegó a nuestro conocimiento el caso de la señora Lucy Mercedes Sánchez Idrovo, de cédula 1715442370, madre de una niña con discapacidad, a quien presuntamente en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, no se le aplicó la exención prevista en el Art. 77 de la ley en mención (Referencia: Factura N° 003-001-000008805).

3. Con tales antecedentes, al amparo de lo previsto en el artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y Capítulo II del Título II de la Resolución N° 058-DPE-CGAAJ-2015 sobre las Reglas para la Admisibilidad y Trámite de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo, de oficio se dio inicio a la respectiva investigación defensorial, emitiéndose el 08 de noviembre del 2017, a las 12h36, la providencia de admisibilidad de foja 2.

II. DILIGENCIAS DEFENSORIALES REALIZADAS Y DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LAS PARTES.-

4. Mediante referida providencia al amparo de los artículos 19 y 21 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y Art. 34 del Reglamento de Admisibilidad y Trámite de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, considerando que la presente problemática ya había sido puesta a conocimiento del Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, mediante oficio N° DPE-CGDZ4-2017-0527-O, se le solicitó que nos informe sobre las medidas adoptadas para garantizar el pleno respeto del contenido del Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades; y, al Notario/a Público/a Cuarto/a del cantón Manta se le requirió que dentro del plazo de ocho días nos informe si para determinarse el monto a pagar, en razón de la factura N° 003-001-000008805, se le aplicó a la señora LUCY MERCEDES SÁNCHEZ IDROVO, de cédula 1715442370, la exención prevista en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades (exención total) o se le aplicó una graduación porcentual de acuerdo al porcentaje de discapacidad de su hija.

5. Con fecha 16 de noviembre de 2017 a las 15h34, el Ab. Santiago Fierro Urresta, Notario Público Cuarto (e) del cantón Manta, presenta un escrito en el que manifiesta que "(...) mediante Comunicados No. 10 y No. 11, de 21 de julio del 2017 y 8 de agosto del 2017, respectivamente, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora del Sistema Judicial del Consejo de la Judicatura, nos hacía conocer a todos los Notarios a nivel Nacional la sentencia emitida por la Corte Constitucional No. 17-SIN-CC. De 7 de junio del 2017, indicándonos textualmente: "En cumplimiento a la Sentencia N.° 017-17-SIN-CC, aprobada por el Plano de la Corte Constitucional, y en concordancia con el criterio de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, se han realizado las siguientes actualizaciones al Sistema Informático Notarial las cuales se encontrarán en producción a partir del día lunes 24 de julio de 2017: 1. Implementación para registrar el grado de discapacidad y su correspondiente porcentaje de exoneración a la tarifas notariales de acuerdo al artículo 1 y 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades..." Además nos obligaba a hacer conocer de este particular a los ciudadanos que ocupen estas dependencias sobre los porcentajes de discapacidad, comunicados que me permito adjuntar al presente para los fines pertinentes. Por lo expuesto me permito indicar a usted que los sistemas que nosotros empleamos en nuestro quehacer diario notarial son automatizados, y no podemos irnos en contra de una tecnología y dirección del Consejo de la Judicatura que se ha implementado para estos fines."
6. A foja 9 reposa la contestación efectuada por Director Provincial del Consejo de la Judicatura Manabí, de fecha 22 de noviembre de 2017 a las 09h10, en el que expresa: "(...) efectivamente a esta judicatura llegó con fecha 03 de octubre de 2017, vuesto oficio N° DPE-CGDZ4-2017-0527-O, a través del cual me expresa vuestra preocupación al presumir que el Consejo de la Judicatura estaría permitiendo el cobro de tasas graduales y en base al porcentaje de discapacidad por servicio notarial a personas con capacidades especiales, en concordancia con la tabla establecida en el artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, solicitando al suscrito se informe el método de cobro realizado por medio del Sistema Informático de Servicio Notarial. En relación a dicha petición, he dado contestación a su autoridad a través de oficio N° DP13-2017-1123, de fecha 24 de octubre de 2017, expresando en virtud de que el tema materia de su consulta versa esencialmente sobre el manejo del sistema informático notarial, tema que es manejado exclusivamente por parte del Nivel Central Institucional, resultó ineludible para el suscrito, trasladar dicho requerimiento a conocimiento de la Subdirección Nacional de Gestión Notarial del Consejo de la Judicatura, mediante oficio N° DP13-2017-1122, del 24 de octubre de 2017, esto, en aras de procurar abordar la problemática evidenciada desde la dependencia competente para el efecto. No obstante lo antes dicho, y dando contestación a su requerimiento de informar las medidas adoptadas por esta dirección provincial para garantizar la plena aplicación del mandato contenido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades; cumpleme indicar que, mediante oficio N° DP13-2017-1177, de fecha 13 de noviembre de 2017, el cual adjunto para su mayor ilustración, he remitido para conocimiento de la Subdirección Nacional del Sistema Notarial del Consejo de la Judicatura, la reforma realizada al Reglamento a la Ley de Discapacidades, publicada en el registro oficial N° 109 del 27 de octubre de 2017, en cuyo artículo 22 se establece como excepción del cobro gradual por porcentaje de discapacidad las tasas notariales, particular que amerita un inmediato análisis y, de ser el caso, la modificación del sistema de cobro notarial por parte de las autoridades respectivas y competentes en el nivel central del Consejo de la Judicatura."

7. Con fecha 04 de diciembre de 2017 a las 08h56, se emite la providencia de seguimiento N° 2, mediante la cual se le solicitó al Director Provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí que dentro del plazo de ocho días nos informe si el Consejo de la Judicatura ha tomado los correctivos del caso a efectos del respeto de la exención prevista en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, y por segunda ocasión se le solicitó al Notario/a Público/a Cuarto/a del cantón Manta que dentro del plazo de ocho días nos informe si para determinarse el monto a pagar, en razón de la factura N° 003-001-000008805, se le aplicó a la señora LUCY MERCEDES SÁNCHEZ IDROVO, de cédula 1715442370, la exención prevista en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades (exención total) o si se le aplicó una gradación porcentual de acuerdo al porcentaje de discapacidad de su hija, exhortándoselo a que en caso de no haberse aplicado una exención total conforme a la Ley, proceda a la devolución de los valores indebidamente pagados, recordándole que es deber de los servidores públicos respetar los derechos previstos en la Constitución y la Ley.

8. Con fecha 12 de diciembre del 2017, en respuesta a dicha providencia, el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, manifiesta: "(...) me permito informar a su autoridad que a través de memorando N° CI-DNMDMCJS-SNGSN-2017-0393-M, de fecha 22 de noviembre de 2017, suscrito electrónicamente por la Ing. Patricia Espinoza Escudero, Subdirectora Nacional de Gestión del Sistema Notarial del Consejo de la Judicatura, se pone en conocimiento de esta dirección provincial lo siguiente: "(...) la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica emitió un criterio con Memorando CI-DNU-2017-0359-M en el que ratifica los cambios producidos en el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, por lo cual esta Subdirección procedió a realizar las modificaciones tecnológicas a fin de actualizar el Sistema Informático Notarial conforme al nuevo reglamento que será puestos en producción el día 23 de noviembre de 2017" En virtud de lo arriba informado, de manera natural usted podrá colegir que el Consejo de la Judicatura ha procedido a rectificar el sistema de cobros de tasas notariales con el objeto de precautelar el derecho a la exención del pago a personas con discapacidad inserto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades y artículo 22 de su reglamento. Respecto a vuestra disposición inserta en el numeral segundo de la providencia que nos ocupa, informo a usted que me he permitido remitir atento oficio al señor Ab. Santiago Fierro Urresta, ex Notario Cuarto Encargado del cantón Manta, con el objeto de conminarle a dar atención y absolución al mismo." Anexa los documentos de fojas 16 a 20.

9. Dentro del presente trámite iniciado de oficio se trató de tomar contacto con la señora Lucy Mercedes Sánchez Idrovo, a quien presumiblemente no se le aplicó la exención total prevista en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, sin embargo pese de las gestiones realizadas no ha sido posible contactarla, por lo que, a pesar.

Calle Chile, entre Constantino Mendoza y César Chávez,
Portoviejo
de emitirse la presente resolución, se deja abierta la posibilidad de iniciar un nuevo trámite defensorial una vez que se logre tomar contacto con ella.

III. ANÁLISIS DE DERECHOS.-

a) Derecho de las personas con discapacidad a la exención en el pago de las tasa/tarifas por servicios notariales.

10. Conforme lo consagra la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3 numeral 1, es deber primordial del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”

11. El artículo 11 ibídem, señala que el ejercicio de los derechos se regirá, entre otros, por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento... 2. (...) El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte... 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidores y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia... 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarios y funcionarias, y empleados y empleadas públicos en el desempeño de sus cargos...”

12. El Art. 425 ibídem respecto a la jerarquía normativa, establece: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juzgados y jueces, autoridades administrativas y servidores y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.”

13. El artículo 35 de este cuerpo constitucional establece que las personas con discapacidad forman parte de las personas y grupos de atención prioritaria.

14. El Art. 48 de la Constitución consagra que: “El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: (...) 7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad.”

15. El Art. 1 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece: “La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se deriven de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural.”

16. El Artículo 2 ibídem, señala: “Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad. El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

Calle Chile, entre Constantino Mendoza y César Chávez,
Portoviejo
17. El artículo 6 de esta misma ley, respecto a quienes se debe considerar como personas con discapacidad, establece: "Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el Artículo 74."

18. El artículo 1 del derogado Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, con posterioridad sentencia N° 017-17-SIN-CC, caso N° 0071-15-IN, de fecha 17 de junio de 2017, expedida por la Corte Constitucional del Ecuador, que declaró inconstitucional la frase "cuarenta por ciento" de los artículos 1 y 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en Registro Oficial Suplemento 5 de 27 de junio del 2017, establecía: "Art. 1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de este Reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al treinta por ciento de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional."

19. En el artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, establece que las personas con discapacidad se encuentran exentas del pago de tasas y/o tarifas por servicios notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación, así como por la obtención de su pasaporte.

20. Con fecha 27 de octubre de 2017 entra en vigor el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, expedido mediante decreto ejecutivo N° 194 y publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 109, en el que se establece: "Art. 1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de este Reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente al treinta por ciento (30%) de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional." y artículo 22: "(...Las tasas y tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación se encuentran exentas de pago por parte de las personas con discapacidad, según el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades.)

21. Que el Art. 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de promover la igualdad y eliminar la discriminación establece la obligación de los Estados de adoptar medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

22. De lo que se puede establecer que se constituye en un derecho de las personas con discapacidad el gozar de la exención total para el pago de las tasas y tarifas notariales, la cual es una exención total, de conformidad con la Ley Orgánica de Discapacidades. Derecho que se constituye en una medida de acción afirmativa o ajuste razonable establecido para que las personas con discapacidad puedan alcanzar una igual material en la sociedad, correspondiéndose a toda autoridad pública/servidor público el velar por que tal derecho sea respetado en todo momento, no pudiendo ninguna disposición de menor jerarquía a una ley orgánica contravenir el sentido de ésta.

b) Derecho a la Seguridad Jurídica

23. Derecho consagrado en el Art. 82 de nuestra Constitución: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes."

24. Respecto a este derecho la Corte Constitucional ecuatoriana ha señalado en la sentencia N° 089-13-SEP-CC, caso N° 1203-12-EP, página 11, que: "Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en

Calle Chile, entre Constantino Mendoza y César Chávez,
Portoviejo
cual a las actuaciones de los distintos poderes públicos: en virtud de aquello, los actos emanados de dichas autoridades públicas deben contener un apego a los preceptos constitucionales, reconociendo la existencia de las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano, mismas que deben ser claras y precisas, sujetándose a las atribuciones que le compete a cada órgano.

La seguridad jurídica se relaciona con la idea del Estado de derecho; su relevancia jurídica se traduce en la necesidad social de contar y garantizar con claros y precisos modelos normativos de conducta destinados a otorgar una seguridad de realización de las previsiones normativas. La seguridad jurídica determina las condiciones que debe tener el poder para producir un sistema jurídico (validez y eficacia) capaz de alcanzar sus objetivos, evitando aquellos aspectos del poder que pueden dañar la seguridad del ordenamiento normativo. A través de la seguridad jurídica se garantiza a la persona la certeza y existencia de un operador jurídico competente para que lo defienda, proteja y tutele sus derechos. En este contexto, la seguridad jurídica es el imperio de la Constitución y la ley, el Estado de derechos, donde se regula y se racionaliza el uso de la fuerza por el poder (quien puede usarla, con qué procedimientos, con qué contenidos, con qué límites); asegura, da certeza y previene en sus efectos.

Gregorio Peces-Barba Martínez sostiene que: "La seguridad supone la creación de un ámbito de certeza, de saber a qué atenerse, que pretende eliminar el miedo y favorecer un clima de confianza en las relaciones sociales entre los seres humanos que intervienen y hacen posible esas relaciones". Desde el punto de vista de la aplicación a nuestro ordenamiento jurídico se concibe a la seguridad jurídica como un derecho constitucional que pretende brindar a los ciudadanos seguridad en cuanto a la creación y aplicación normativa.

25. Respecto a la certeza y previsibilidad, en las páginas 8 y 9 de la sentencia N° 081-17-SEP-CC, caso N° 1598-11-EP, ha manifestado: "La Constitución de la República, en su artículo 82 consagra a la seguridad jurídica como un derecho constitucional, el cual "... se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes". De tal forma que, cualquier acto proveniente de los diferentes poderes o funciones públicas, debe ser dictado en estricta sujeción al ordenamiento jurídico nacional con la Constitución de la República a la cabeza y debe estar enmarcado en las atribuciones y competencias asignadas a cada entidad.

Del enunciado normativo que precede, se colige que la seguridad jurídica comprende un ámbito de certidumbre y previsibilidad en el individuo, en el sentido de saber a qué atenerse al encontrarse en determinada situación jurídicamente relevante. Estas condiciones están diseñadas para impedir la arbitrariedad en las actuaciones de quienes ejercen el poder público, pues su sometimiento a la Constitución y a las normas que integran el ordenamiento jurídico marca los cauces objetivos en los cuales cumplirán sus actividades en el marco de sus competencias.

Los elementos de certidumbre y previsibilidad a los que se refiere el párrafo anterior, se expresan en todo ámbito en el que el derecho a la seguridad jurídica es ejercido. Así, el titular del derecho genera certeza respecto de un mínimo de estabilidad de su situación jurídica, en razón de los hechos ocurridos en el pasado. Adicionalmente, la previsibilidad le permite generar expectativas legítimas respecto de cómo el derecho deberá ser aplicado e interpretado en el futuro.

26. Como se señaló en líneas anteriores, la seguridad jurídica es el respeto a la Constitución y demás normas que integran el ordenamiento jurídico, a través del cual se logra la sujeción de toda autoridad pública a la Constitución y por ende a la estructura jerarquizada prevista en su artículo 425, normativa dentro de la cual se desarrolla en gran medida los derechos reconocidos en la Constitución.

27. En virtud de la normativa transcrita, de lo manifestado por las partes y de los documentos proporcionados; para resolver se formulan las siguientes consideraciones:

Calle Chile, entre Constantino Mendoza y César Chávez,
Portoviejo
IV. CONSIDERACIONES.-

28. La Defensoría del Pueblo es competente para conocer y resolver la presente reclamación acuerdo a lo previsto en el Art. 215 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y Capítulo II de la Resolución N° 058-DPE-CGAJ-2015 sobre las Reglas para la Admisibilidad y Trámite de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo, vigente a la fecha de sustanciación del presente trámite defensorial. No se ha observado violación de trámite ni omisión de solemnidad sustancial alguna, que pueda influir en la decisión, razón por la cual es válido todo lo actuado. Dejándose constancia que uno de los principios fundamentales de los procedimientos que desarrolla la Defensoría del Pueblo es el principio de informalidad, conforme lo prevé el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

29. Conforme se dejó sentado en líneas anteriores la presente investigación defensorial se inició de oficio por parte de esta dependencia de la Defensoría del Pueblo, al tenerse conocimiento que en el sistema informático notarial para el cobro de la tasa y/o tarifa notarial se estaba aplicando la gradación prevista para el cobro de tributos que depende del porcentaje de la discapacidad de la persona, mas no la exención total prevista en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Y, si bien dentro del presente trámite defensorial el Consejo de la Judicatura procedió a solucionar el problema en cuestión, es necesario realizar el siguiente análisis, ya que es totalmente inadmisible que este hecho vuelva a ocurrir en desmedro de los derechos de las personas con discapacidad.

30. En primer lugar se indica que el legislador fue muy claro en la redacción del Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, estableciendo en él que las personas con discapacidad se encuentran exentas del pago de tasas y/o tarifas por servicios notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación, así como por la obtención de su pasaporte. No cabe lugar a dudas que se trata de una exención total. Asimismo se indica que la Ley Orgánica de Discapacidades, es en efecto una ley orgánica, ya que en ella se regulan y desarrollan los derechos de las personas con discapacidad, en condición discapacitante, así como de terceros expresamente en ella descritos; por tanto, en la escala jerárquica de aplicación normativa prevista en el Art. 425 de la Constitución, solo están por debajo de la misma Constitución y de los tratados y convenios internacionales. Es decir, cualquier otra norma o disposición de cualquier carácter que contravenga a lo en ella establecido o en desmedro de los derechos en ella regulados, carecerá de eficacia jurídica, siendo imperativo para toda autoridad judicial o administrativa aplicar la norma jerárquicamente superior, armonía con la Constitución.

31. De acuerdo al escrito que reposa a foja 3 del expediente defensorial, presentado el 16 de noviembre de 2017 a las 15h34, por el Ab. Santiago Sierra Urresta, Notario Público Cuarto (e) del cantón Manta, la modificación en el sistema informático notarial se le informó mediante comunicados N° 10 y N° 11, de 21 de julio del 2017 y 8 de agosto del 2017, respectivamente. Resultando que mediante el comunicado N° 10 la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora del Sistema Judicial del Consejo de la Judicatura, les hacía conocer a todos los notarios a nivel nacional que en cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Constitucional No. 017-17-SINCC y en concordancia con el criterio de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, se habían realizado las siguientes actualizaciones al Sistema Informático Notarial las cuales se encontraron en producción a partir del día lunes 24 de julio de 2017: “1. Implementación para registrar el grado de discapacidad y su correspondiente porcentaje de exoneración a la tarifas notariales de acuerdo al artículo 1 y 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades...”.

32. Nótese que los argumentos por los cuales la Subdirección Nacional de Gestión del Sistema Notarial del Consejo de la Judicatura procede a parametrizar el sistema informático notarial, aplicando la exoneración a las personas a partir del 30% de discapacidad y de acuerdo al grado de la misma conforme a la tabla constante en el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, son la sentencia emitida por la Corte Constitucional N° 017-17-SINCC y en concordancia con el criterio de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura.

33. Al respecto, en la sentencia N° 017-17-SINCC, caso N° 0071-15-IN, de fecha 17 de junio de 2017, emitida por la Corte Constitucional ecuatoriana, se declaró inconstitucional la frase “cuarenta por ciento” de los artículos 1 y 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, tornándose al “treinta por ciento” para que una persona pueda ser considerada como persona con discapacidad; mas en ella no se estableció que la graduación porcentual prevista en el Art. 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades es aplicable a la tasa y/o tarifa notarial. Es más, en la página 19 de esta sentencia la Corte, en referencia al Art. 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, señala que: “Del análisis de la norma transcrita, se desprende que la misma se refiere a los...”.

Calle Chile, entre Constantino Mendoza y César Chávez, Portoviejo
beneficios tributarios contenidos en el régimen tributario para las personas con discapacidad y los correspondientes sustitutos -personas que se encargan de su cuidado-, cuya aplicación está supeditada a lo establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades, así como a la normativa tributaria aplicable en cada caso."; es decir, la gradiación no es aplicable al ámbito notarial donde lo que se cobra es una tarifa y no un tributo, y en un supuesto no configurado que sea propiamente un tributo, por mandato expreso la exención es total conforme lo previsto en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades.

34. Criterio jurídico último que en el año 2014 el mismo Consejo de la Judicatura hizo público a través de su página web: "http://www.funcionjudicial-manabi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=431:personas-con-discapacidad-exentas-del-pago-de-servicios-notariales&catid=52:noticias-home" en donde se puede leer: "Las personas con discapacidad se encuentran exentas del pago total de las tasas notariales. El Director Nacional Jurídico del Consejo de la Judicatura, Esteban Zavala, recordó mediante documento oficial, emitido el 28 de mayo de 2014, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades que establece esta exoneración. Considerando que el Consejo de la Judicatura busca asegurar la correcta y eficiente función de los organismos jurisdiccionales autónomos y auxiliares, entre los que se cuenten las notarías, Zavala aclara las inquietudes de varios notarios con respecto al cobro para las personas con discapacidad, para lo cual cita el artículo mencionado: "Art. 77.- Tasas y/o tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación.- Las personas con discapacidad se encuentran exentas del pago de las tasas y/o tarifas por servicios notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación, así como por la obtención de su pasaporte". Adicionalmente, la Directora General del Consejo de la Judicatura, Andrea Bravo, mediante oficio solicitó a las y los notarios de todo el país dar estricto cumplimiento a la normativa indicada, a través de un servicio adecuado y oportuno, para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad."

35. Por lo cual, no se justifica que con posterioridad la Dirección Nacional Jurídica del Consejo de la Judicatura emita un criterio en el que se concluya que a consecuencia de tal sentencia se entiende que los rubros por concepto de tasa/tarifa notarial deberán pagarse acorde a la gradiación porcentual antes referida, ya que la sentencia en cuestión en nada modificó el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Es más, en un supuesto que hubiesen tenido dudas sobre la procedencia de la exención total, en el Art. 4 de la Ley Orgánica de Discapacidades se establece que dicha ley se sujeta y se fundamenta, entre otros, en el principio Pro Hominem, lo que implica que las disposiciones legales se apliquen en el sentido más favorable y progresivo a la protección de los derechos en ella reconocidos. Por lo que debió haberse realizado la interpretación que mejor se adecúe a la protección del derecho.

36. Tampoco se justifica que la subsanación en el sistema informático notarial nacional no se haya realizado sino mucho después de entrada en vigor el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades1, en cuyo artículo 22 se establece: "(...) Las tasas y tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación se encuentran exentas de pago por parte de las personas con discapacidad, según el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades.". Apreciándose que dicho artículo del reglamento fue el determinante para la subsanación, ya que de acuerdo al documento de foja 16 la Subdirección Nacional de Gestión del Sistema Notarial del Consejo de la Judicatura, manifiesta: "(...) la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica emitió un criterio con Memorando CI-DNI-2017-0359-M en el que ratifica los cambios producidos en el nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, por lo cual esta Subdirección procedió a realizar las modificaciones tecnológicas a fin de actualizar el Sistema Informático Notarial conforme al nuevo reglamento que será puestos en producción el día 23 de noviembre de 2017" (El criterio jurídico reposa a foja 17)

37. Para esta dependencia de la Defensoría del Pueblo le resulta preocupante que en desconocimiento total de la normativa orgánica vigente (Ley Orgánica de Discapacidades) que regula y desarrolla los derechos de las personas con discapacidad, se adopten decisiones que se traduzcan en amenaza o vulneración a tales derechos y que ello no sea subsanado sino hasta que un reglamento “confirma” el carácter total de la exención. Asimismo le

---


Calle Chile, entre Constantino Mendoza y César Chávez,
Portoviejo
resulta preocupante que por una mala interpretación a una sentencia que buscó garantizar los derechos de las personas con discapacidad se adopte tal decisión; más, si se considera que el mismo Consejo de la Judicatura ya había emitido un pronunciamiento público sobre el tema en el año 2014, en donde se reconocía correctamente que la exención en esta materia es total. Pero aún más preocupante resulta que las y los diferentes notarías y notarios a nivel nacional durante el tiempo en que el sistema informático notarial fue modificado, hayan llegado a cobrar la tarifa notarial a personas con discapacidad desconociendo la exención total a la que tienen derecho.

38. En este contexto, es preciso señalar que las exenciones rebajas y exoneraciones previstas constitucional y legalmente, en favor de las personas con discapacidad, así como en favor de sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que las tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado, no se debe a una mera dádiva o concesión estatal, sino que encuentran su fundamento en la necesaria adopción de medidas para eliminar la discriminación o desigualdad estructural de la que han sido víctimas las personas con discapacidad y sus familiares o cuidadores a lo largo de la historia, a tal punto que han sido excluidos socialmente y sus posibilidades de superación personal y familiar han resultado menoscabadas a consecuencia de la misma. Resultando evidente que una persona con discapacidad materialmente no puede acceder a muchos aspectos a los que una persona sin discapacidad sí, por lo que la adopción de los denominados ajustes razonables, previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o medidas de acción afirmativa, de acuerdo a nuestra Constitución, son imprescindibles para el efectivo goce y ejercicio de muchos de sus derechos humanos. Por lo que el acceder a los beneficios que prevé la Ley para estos casos contribuye notablemente a mejorar la calidad de vida tanto de la persona con discapacidad como de su cuidador y por ende garantizar sus derechos. Es decir, también encuentran su fundamento en la necesidad de alcanzar equidad social.

39. Seguramente por esto en el Art. 115 de la Ley Orgánica de Discapacidades se ha tipificado como una infracción grave el cobro de tasas y tarifas notariales sin la respectiva exoneración: “Se impondrá sanción pecuniaria de cinco (5) a diez (10) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o suspensión de actividades hasta por quince (15) días, a juicio de la autoridad sancionadora, las siguientes infracciones: (...) 4. Cobro de tasas y tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y cedulación sin la respectiva exoneración;” infracción que pudo haberse cometido durante estos casi cuatro meses por los diversos notarlos y notarías a nivel nacional por la modificación que el mismo Consejo de la Judicatura a través de su departamento correspondiente realizó. No constituyéndose ello en causal de excusa para las y los notarios que incurrieron en tales cobros, ya que la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 11 numerales 3, 5 y 9; 425; y, 426, es clara al establecer que es obligación de los servidores públicos respetar y hacer respetar los derechos, así como aplicar la norma jerárquica superior y el someterse a la Constitución. Por lo que a pesar de la modificación en el sistema informático notarial, las y los notarios estaban en la obligación de aplicar la exención total y hacerle notar la terrible inobservancia a tal derecho que estaba generando el Consejo de la Judicatura, a fin que proceda de manera inmediata a la respectiva suspenión, como en efecto hizo notar esta dependencia de la Defensoría del Pueblo en tutela de las personas con discapacidad.

40. Es por ello que nos resulta inadmisible que el Notario Público Cuarto (e) del cantón Manta, en su escrito de foja 3, manifieste que: “Por lo expuesto me permito indicar a usted que los sistemas que nosotros empleamos en nuestro quehacer diario notarial son automatizados, y no podemos irnos en contra de una tecnología y dirección del Consejo de la Judicatura que se ha implementado para estos fines.” Los notarios y notarías son servidores y servidoras públicas, están supeditados a la Constitución y demás normativa vigente, pero especialmente están subordinados al cumplimiento irrevocable de los derechos de las personas, con especial atención a aquellas que pertenece a los grupos de atención prioritaria, como las personas con discapacidad, por lo cual no pueden limitarse a aplicar ciegamente disposiciones que de manera obvia inobservan postulados contenidos en una ley


Calle Chile, entre Constantino Mendoza y César Chávez,
Portoviejo
orgánica y que se constituyen en un derecho de las personas con discapacidad.

41. Por las consideraciones expuestas y de conformidad a las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, no habiendo causas formales que incidan en la plena validez del presente trámite, esta COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4 de la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus competencias, RESUELVE:

V. RESOLUCION:

De acuerdo a lo desarrollado en la presente investigación, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, conforme a sus competencias constitucionales y legales, con la finalidad de tutelar el derecho a la exención previsto en el Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, dispone lo siguiente:

UNO.- DECLARAR, que el trámite se realizó de conformidad con los previsto en el artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 13 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y 102 y siguientes de la Ley Orgánica de Discapacidades.

DOS.- DECLARAR que en el presente caso el Consejo de la Judicatura inobservó el contenido del Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, al parametrizar el sistema informático notarial aplicando la gradación porcentual prevista en el Art. 6 del anterior Reglamento a dicha ley, para el cobro de las tarifas notariales a las personas con discapacidad, lo cual fue subsanado durante la investigación defensorial desarrolla por esta Defensoría del Pueblo.

TRES.- EXHORTAR al Consejo de la Judicatura a que dentro del ámbito de sus competencias establezca mecanismos para la atención ágil de los reclamos de aquellas personas con discapacidad que se vieron afectadas al pagar la tasa y/o tarifa notarial, a fin que le sean devueltos los valores indebidamente pagados. Para dicho efecto se le exhorte también a difundir la presente resolución a las diferentes notarías.

CUATRO.- SOLICITAR al Consejo de la Judicatura que previo a adoptar medidas como la que ocasionó la inobservancia del contenido del Art. 77 de la Ley Orgánica de Discapacidades, se realice un estudio minucioso armónico con los derechos y principios de aplicación reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y los principios y derechos desarrollados en la Ley Orgánica de Discapacidades, a fin que de tales medidas no resulten violados o amenazados derechos de las usuarias y usuarios del sistema notarial.

CINCO.- DEJAR a salvo el ejercicio de las acciones de que se consideren asistidas las partes.

Notifíquese y cúmplase.

Ab. María José Fernández Bravo
COORDINADORA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL DEFENSORIAL ZONAL 4

Notificaciones:
- Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí
- Notario/a Público/a Cuarto/a (e) del cantón Manta

Calle Chile, entre Constantino Mendoza y César Chávez,
Portoviejo